



JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL

Yopal, Casanare, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Proceso : ESPECIAL – REORGANIZACIÓN
Referencia : 850013103002-2017-00115-00
Demandante : POLICARPO PÉREZ MONTAÑA
Demandado : BANCO DAVIVIENDA Y OTROS.

I. Objeto

Se pronuncia el Despacho sobre el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por la apoderada del deudor.

II. La providencia recurrida

Se trata del auto de fecha 15 de julio de 2022, por medio del cual se decretó el desistimiento tácito de la acción, como quiera que el deudor no realizó ninguna de las actuaciones requeridas en auto de fecha 8 de abril de 2022, consistente en que el deudor notificara a los acreedores, radicara las medidas cautelares y allegara constancia de la publicación del aviso en su domicilio.

III. Del recurso interpuesto

El deudor a través de apoderada judicial, presenta dos escritos, el primero de ellos de fecha 19 de julio de 2022, en el que argumenta, ser apoderada del deudor dentro de la ejecución que adelanta Finanzautos y que radicó memoriales el 7 de abril y 22 de noviembre de 2021, sin que a la fecha se haya dado trámite a sus solicitudes y por ello, considera debe revocarse el auto y en su defecto resolver sus peticiones.

El segundo escrito fue presentado el 22 de julio de 2022, mismo que además de allegar el respectivo mandato, refiere como reparos, que no se dio la oportunidad al deudor para nombrar otro apoderado ya que en el auto que decretó el desistimiento tácito también aceptó la renuncia del apoderado, sin que este conociera el estado del proceso, lo que considera vulneraría los derechos y garantías de su prohijado y solicita se revoque la decisión.

IV. Actuación Surtida

El trámite del recurso de reposición se cumplió dado que por secretaria se corrió traslado del recurso según lo dispuesto por el CGP art. 110 y 319.

V. CONSIDERACIONES

El recurso de reposición es un medio para impugnar las providencias judiciales cuya función consiste en que el mismo funcionario que la profirió pueda corregir los errores de juicio en que haya incurrido y como consecuencia reforme o revoque su providencia, por lo cual, se procede a resolver lo que en derecho corresponda, con fundamento en las siguientes premisas normativas y fácticas, inicialmente se traen las disposiciones que rigen la materia, consagradas en el artículo 317 *del CGP*, que para el caso refiere:

“El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. *Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.*

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas. (...)”

Frente al particular, la Corte Constitucional ha reiterado:

“...no es una figura novedosa en tanto ocupa el lugar que antes ocupó la perención como una forma anormal de terminación del proceso, imponible cuando se acredita la inactividad de la parte a cuyas instancias se promovió un trámite o proceso, el cual se paralizó por su causa. Adicionalmente, le ha atribuido los siguientes beneficios: (i) evita la paralización del aparato jurisdiccional en ciertos eventos; (ii) permite obtener la efectividad de los derechos de quienes actúan o participan en la administración de justicia, pues la efectividad de los derechos depende de la prontitud de los medios que sirven para materializarlos; y (iii) promueve la certeza jurídica de quienes actúan como partes en los procesos, en la medida en que busca que se administre pronta y cumplida justicia, y que las controversias no se prolonguen indefinidamente a lo largo del tiempo.”¹

Norma y jurisprudencia que, difieren de los argumentos de la recurrente quien inicialmente solicita atender memoriales que fueron incorporados al plenario y de los cuales indica no existió pronunciamiento, además de haber tenido la oportunidad para que se alegaran las inconsistencias a que hubiere lugar, así mismo, resultan ser situaciones que ocurrieron con anterioridad al requerimiento del desistimiento tácito y que nada tienen que ver con los aspectos fuente de su decreto.

Obsérvese que, esta judicatura a efectos de continuar con las etapas del proceso, impuso el cumplimiento de las cargas procesales ordenadas en la providencia del 26 de octubre de 2017, es decir, desde la apertura al trámite de insolvencia y que transcurridos más de 5 años no habían sido acatadas por el deudor, apoderado o promotor, se memora, estas son actuaciones que debería adelantarse sin necesidad de exigencia alguna por parte de quien administra justicia, ya que es el interesado quien propende por la efectividad de sus derechos y garantías.

Pasando a otro aspecto y respecto al argumento de la falta de oportunidad para que el deudor otorgará nuevo poder, palmario resulta realizar varias afirmaciones, la primera de ellas consistente en que, el estatuto procesal prevé de manera clara el deber de informar al poderdante la decisión de renunciar al mandato otorgado, con el fin de hacerle saber que ya no va a representar sus intereses dentro del proceso, requisito que se cumplió dentro del presente asunto, por eso se aceptó la renuncia, entonces, pretender ahora que se otorgue un término para que la parte confiera poder a otro profesional resultaría improcedente y violatorio del debido proceso al que hace alusión la memorialista, pues se trata de un procedimiento que no se encuentra contemplado en la legislación colombiana o en el desarrollo jurisprudencial.

Adicionalmente, se recuerda que, conforme el artículo 11 de la ley 1116 de 2006, la solicitud de reorganización y la intervención en el mismo puede hacerse directamente o a través de abogado, quiere decir ello que, no se requiere la presencia de un apoderado, en suma, la falta de representación judicial al conocerse la renuncia del profesional del derecho, es una situación que pende de la parte y no del despacho.

¹ Sentencia C-1186 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araujo Rentería).

De otra parte, obra decir que, al no existir causal de suspensión o interrupción del proceso que impidiera continuar con su normal desarrollo, y en el entendido que, solo la actuación que diera cumplimiento a las cargas impuestas interrumpe el computo del término otorgado² so pena de sanciones, al no existir constancia del cumplimiento o de allanarse a cumplir los requerimientos, el despacho impuso la sanción del desistimiento tácito por ser evidente el desinterés del deudor por lograr la recuperación de la empresa, finalidad primordial de la ley de insolvencia.

En tal sentido, puede concluirse que los argumentos del recurrente no cuentan con entidad suficiente para derrocar la decisión fustigada, razones por las cuales se mantendrá incumbe la decisión que termina el trámite de reorganización de la persona natural comerciante por desistimiento tácito.

VI. Del recurso de apelación

De manera subsidiaria se presentó el recurso de apelación contra el auto de fecha 15 de julio de 2022, que resulta improcedente, ya que el proceso de insolvencia es de única instancia según disposiciones del artículo 19 del CGP.

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal Casanare

VII. RESUELVE

PRIMERO. NO REPONER el auto de fecha 15 de julio de 2022, que decretó el desistimiento tácito de la acción en referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO. NEGAR el recurso de alzada propuesto de manera subsidiaria, para ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Única de esta ciudad conforme las disposiciones del artículo 19 del CGP.

TERCERO. RECONOCER personería jurídica para actuar a la abogada Nohora Patricia Rincón, en representación del deudor conforme el poder a ella conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER ARTURO ROCHA VÁSQUEZ

Juez

² La Corte Constitucional ha reiterado en Sentencia C-1186 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araujo Rentería), la jurisprudencia de la Corte Suprema De Justicia, donde unifica criterios, STC11191-2020, Radicación n° 11001-22-03-000-2020-01444-01, Magistrado ponente Octavio Augusto Tejeiro Duque, precisando: Es así como el numeral 1° del artículo 317 del Código General del Proceso prevé que se tendrá por «desistida la demanda», cuando el postulante, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la providencia que lo requiera, no cumpla con la «carga procesal» que demande su «trámite».

Firmado Por:
Javier Arturo Rocha Vasquez
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 002
Yopal - Casanare

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dcf0e92d621a03830ee204b579b80131cced717c1efeac4130cf8d061e41821d**

Documento generado en 16/09/2022 05:03:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>